

6835

**RESOLUCION de la Subsecretaría por la que se convoca a don Julio Hardisson y Romeu y doña Dolores Porras y Pedrosa en el expediente de rehabilitación del título de Conde de Santa Cruz de la Torre.**

Don Julio Hardisson y Romeu y doña Dolores Porras y Pedrosa han solicitado la rehabilitación en el título de Conde de Santa Cruz de la Torre, lo que, de conformidad con lo que dispone el número 25 de la Real Orden de 21 de octubre de 1922, se anuncia para que en el plazo de quince días, a partir de la publicación de este edicto puedan alegar los interesados lo que crean convenir a sus respectivos derechos.

Madrid, 12 de marzo de 1974.—El Subsecretario José del Campo.

6836

**RESOLUCION de la Dirección General de los Registros y del Notariado en el recurso gubernativo interpuesto por don Jaime Llaneras Fuster contra calificación del Registrador Mercantil de Barcelona.**

En el recurso gubernativo interpuesto por don Jaime Llaneras Fuster contra la negativa de V. S. a inscribir una escritura de nombramiento de Consejo de Administración de Sociedad anónima;

Resultando que por escritura de 4 de febrero de 1972 se constituyó la Compañía mercantil «Ilorpo, S. A.», que fué inscrita en el Registro de Barcelona; que por acuerdo del Consejo de Administración se convocó Junta general ordinaria, que tendría lugar el 8 de junio de 1973 con el siguiente Orden del día: 1.º Examen del ejercicio de 1972. Memoria, balance y cuentas de pérdidas y ganancias. Aprobación, en su caso, y aplicación de resultados. 2.º Aprobación o censura de la gestión social. 3.º Designación de accionistas: censores de cuentas para el ejercicio de 1973 (titulares y suplentes). 4.º Ruegos y preguntas. 5.º Aprobación del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de interventores; que oportunamente se publicaron anuncios de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» correspondiente al 18 de mayo anterior y en el «Diario de Barcelona» del 22 del mismo mes; que la Junta tuvo lugar el día señalado y en el local previsto, con asistencia de 3.145 acciones de las 4.000 existentes, y que, representaban el 78,62 por 100 del capital desembolsado, adoptándose, con el voto favorable de 2.397 acciones (el 71,21 por 100 de los asistentes y 59,92 por 100 del capital desembolsado) el acuerdo de separar a los cuatro Administradores que integraban el Consejo de Administración, don Jesús Rodríguez Bueno, don Jaime Llaneras Fuster, don Antonio Llicano Reta, don Luis Sagüés Amorena, nombrándose para sustituirlos un nuevo Consejo de cinco miembros, compuesto de la siguiente forma: Don Jaime Llaneras Fuster, como Presidente; doña Trinidad Pérez Navarro, doña Mercedes Usechi Mayo y don Jesús Rodríguez Bueno, Vocales Consejeros, y don Luis Sagüés Amorena, como Vocal Secretario. Todos ellos de nacionalidad española. Por plazo de diez años, cesando dos, por sorteo, a los cinco; que los señores Llaneras y Sagüés, presentes en el acto, aceptaron sus cargos manifestando no comprenderles ninguna incompatibilidad; que se delegó en estos dos Consejeros, indistintamente, para que en representación de la Junta general comparezcan ante Notario y eleven a escritura pública los acuerdos tomados en dicha Junta general, susceptibles de inscripción en el Registro Mercantil; y que, en cumplimiento de este acuerdo, don Jaime Llaneras Fuster otorgó el 12 de junio de 1973, ante el Notario de Barcelona don Vicente Coca y Coca, la correspondiente escritura;

Resultando que presentada en el Registro primera copia del citado documento, fué calificado con la siguiente nota: «Examinado este documento, acompañado de un ejemplar del «Boletín Oficial del Estado» número 118, de 18 de mayo de 1973, y de otro del periódico de Barcelona «Diario de Barcelona» del día 22 de los mismos mes y año, se deniega su inscripción, por infringirse el artículo 53 de la Ley de Sociedades Anónimas, ya que en la convocatoria de la Junta general, cuyos acuerdos se formalizan en la precedente escritura, no se consigna entre los asuntos a tratar el nombramiento de nuevo Consejo de administración, lo que se lleva a efecto en la propia Junta. El defecto se estima insubsanable, no procediendo anotación de suspensión»;

Resultando que don Jaime Llaneras Fuster interpuso recurso gubernativo contra la anterior calificación y alegó: Que el problema que se plantea consiste en dilucidar la forma de reemplazar a los Administradores cesados por una Junta general usando de la facultad que le confiere el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas; que consecuencia de la facultad de destitución, que corresponde a la Junta en cualquier momento, sin necesidad de que tal extremo conste en el Orden del día (Resolución de 26 de febrero de 1953), es el derecho de reemplazar a los destituidos en el mismo acto, ya que, como declara la sentencia del Tribunal Supremo de 30 de abril de 1971, los Administradores constituyen un órgano necesario, no sólo para el funcionamiento, sino para la existencia misma de la Sociedad; que en los casos de remoción integra de un Consejo —o en la hipótesis de un Administrador único—, de

no atribuirse la facultad de nombrar reemplazantes, jamás podría convocarse una Junta posterior; que en un caso casi análogo, la Resolución de 24 de junio de 1969, para que la Sociedad no quedase sin Administradores, acudió a la figura de los Administradores de facto; que aunque la Ley establece en su artículo 53 que en el anuncio de la convocatoria se harán constar todos los asuntos que hayan de tratarse en la Junta, el 73 dispone que si durante el plazo para el que fueren nombrados los Administradores se produjesen vacantes, el Consejo podrá designar entre los accionistas las personas que hayan de ocuparlos hasta que se reúna la primera Junta general, que se pronunciará sobre los nombramientos hechos; que si tales vacantes se produjesen después de publicada la convocatoria de una Junta y antes de que ésta se celebrase, la misma podría ratificar las designaciones realizadas, constituyendo el supuesto una excepción a la regla general del artículo 53; que con mayor razón, si las vacantes se producen en la misma Junta por motivos de utilidad o conveniencia, en situaciones que aconsejen la destitución o dimisión en bloque de toda la Junta anterior, la exigencia de convocatoria de nueva Junta constituiría un entorpecimiento que podría dificultar la buena marcha de la Sociedad, sin que sea admisible, por el contrario, la alegación de que una minoría pueda apoderarse por sorpresa de la dirección de una Sociedad, ya que siempre quedaría a los socios mayoritarios el recurso de pedir la inmediata suspensión de los acuerdos perjudiciales, mediante la vía del número 4 del artículo 70; y que la simple lectura de la escritura calificada y certificación que la acompaña pone de manifiesto que la Junta se celebró en primera convocatoria, los acuerdos se tomaron por gran mayoría de socios y de capital, de los cuatro Administradores cesados fueron reeligidos dos, etc., todo lo cual despoja cualquier recelo o suspicacia que pudiera existir sobre protección de minorías, habiendo transcurrido por otro lado, con exceso, el término que la Ley concede a los accionistas disidentes o ausentes para impugnar los acuerdos tomados, todo lo cual demuestra la clara admisión por la unanimidad de los accionistas en las decisiones adoptadas;

Resultando que el Registrador dictó acuerdo manteniendo su calificación por los siguientes fundamentos: Que el tema tiene su base en el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas, junto con su jurisprudencia interpretativa, y constituye su precedente el artículo 2.383 del Código Civil italiano, sobre sustitución de Administradores, parcialmente analizado por la doctrina de autores y tribunales, que generalmente no han tocado la cuestión del nombramiento de los reemplazantes, salvo la sentencia de 1971 en que apoya su argumentación el recurrente; que con los debidos respetos, estima que los razonamientos de la citada sentencia descansan en una base falsa: La imposibilidad de existencia y subsistencia de una Sociedad sin Administradores, cuando, evidentemente, el artículo 15 de la Ley de Sociedades Anónimas es permisivo de tal situación, siendo perfectamente constatable el gran número de Sociedades anónimas que funcionan con Administradores caducados, fallecidos o dimitidos, e incluso hacen su vida normal mediante poderes conferidos a Gerentes o Apoderados, que aun cuando dicha sentencia hubiera estimado equivalentes existencia y vida normal, lo cierto es que sus deducciones en orden al nombramiento de Administradores reemplazantes deben estimarse conceptuales, dogmáticas y abstractas, ya que habrían prescindido de analizar a fondo el dispositivo montado por la Ley de Sociedades Anónimas para el único supuesto de Administradores de conducta censurable, llegando a unas conclusiones teóricas formalistas que impiden encajar sus conclusiones generales y la cobertura jurídica que crea, con la riqueza de manifestaciones que la vida ofrece y en numerosos supuestos los daños podrían ser superiores a los beneficios que se pretendían obtener para los intereses protegidos; que si una página de historia vale por un libro de lógica, puede examinarse el ejemplo de una Junta anódina que se celebrase en segunda convocatoria, con asistencia de un 21 por 100 de socios, en que un 11 por 100 constituye una minoría inquieta y peligrosa que aprovechando la coyuntura procede a remover los Administradores y nombrar otros antes de que la mayoría pueda actuar eficazmente, imprimiendo rumbos funestos a la vida social, de imposible reparación; que aunque a tales conclusiones no pueda llegarse en el supuesto concreto que motiva la escritura denegada, si podría originarlos en muchos casos una generalización lógica y artificiosa de la misma, con mengua y descrédito del dispositivo legal montado para casos de emergencia; que en muchas ocasiones una Sociedad acéfala es más conveniente para los intereses de los socios que otra con Administradores nombrados precipitadamente, tal vez por minorías, con miras contrapuestas a las de la Empresa; que fácilmente, por la vía de la convocatoria judicial que señala el artículo 57 de la Ley de Sociedades Anónimas, puede restablecerse la normalidad de la vida social, sin perjuicio de aceptar el criterio de algún tratadista, según el cual, en caso de desaparición de los Administradores, es la propia Junta la encargada de la administración, que inmediatamente debe convocar nueva Junta general con objeto de cubrir las vacantes producidas; que la excesiva interpretación del recurrente puede plantear graves problemas difíciles de resolver sin específica regulación legal, pudiendo señalarse como ejemplo los del plazo de ejercicio de los nuevos Administradores, renovación parcial del Consejo, imposibilidad práctica de agruparse las minorías en la forma

prevista por el Decreto de 29 de febrero de 1952, etc.; que la abusiva interpretación por el recurrente del artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas se amplía aún más al no limitarse a sustituir a los Administradores, sino que, por añadidura, la Junta amplía su número, designando a quien cubrirá la plaza creada y estableciendo un puesto de Vocal-Secretario, sin que nada de ello figure en el Orden del día señalado para la celebración de la repetida Junta; que todo ello constituye una utilización del artículo 75 de la Ley para fines no procedentes, como son la destitución de un solo Administrador, o quizá, con mayor exactitud, la renovación y ampliación del Consejo bajo la apariencia de una revocación de Consejeros, lo que en sentido técnico no encaja en el mencionado precepto; que no procede dedicar especial atención a los argumentos del recurrente sobre designación provisional o dimisión en bloque de Consejeros, por carecer de sólida base de discusión, como igualmente su afirmación de haberse consolidado los acuerdos al no haber sido impugnados en plazo legal, pues tal posibilidad cuenta a partir del momento de la inscripción, aún pendiente; y que, finalmente, llama la atención sobre la importancia jurídica del problema planteado, que según se decida en uno u otro sentido puede producir diferentes consecuencias, sentando un trascendental criterio en el mundo de las Sociedades anónimas.

Vistos los artículos 15, 53, 71, 72 y 75 de la Ley de Sociedades Anónimas de 17 de julio de 1951, y las sentencias del Tribunal Supremo de 22 de febrero de 1967, 31 de enero de 1969 y 30 de abril de 1971;

Considerando que el objeto del recurso se concreta en determinar si en la Junta general de una Sociedad anónima —estatutariamente configurada con un Consejo de administración con un máximo de seis Vocales—, convocada, según el Orden del día, para «aprobación o censura de la gestión social», entre otros puntos, puede acordar la separación de sus cuatro Administradores y, con exclusión efectiva del Vocal que de hecho ejercía funciones de Secretario, nombrar nuevo Consejo de cinco, en el que se integran tres de los componentes del anterior, uno de ellos con título de Vocal-Secretario;

Considerando que «la separación de los Administradores podrá ser acordada en cualquier momento por la Junta general», conforme declara terminantemente el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas, precepto que para la legalidad del acuerdo no exige siquiera la existencia de una justa causa, consecuencia todo ello de la nota de revocabilidad que caracteriza el nombramiento de los Administradores, y ninguna coyuntura mejor para ello que el debate sobre «aprobación o censura de la gestión social», número 2 del Orden del día de la Junta general debidamente convocada por la Compañía mercantil «Talleres Pellicer, S. A.», y a la que asiste un 78,62 por 100 del capital desembolsado, cifra superior al quórum legal;

Considerando que esta facultad de destitución, singular o plural, de los miembros del Consejo, que corresponde tan ilimitada y sin condicionamientos de ninguna clase a la Junta legalmente convocada y constituida, lleva aparejada, y no por meras motivaciones «conceptuales, dogmáticas y abstractas», la de restablecer, sin aplazamientos no obligados, la normalidad social, con la integración del órgano de administración dentro del marco estatutario, en este caso con la designación de nuevo Consejo compuesto de número no superior a seis miembros, incluido el Secretario, cargo ahora formalmente establecido, todo en virtud de una votación con quórum también superior al legal, y que, en definitiva, representa un 52,92 por 100 del capital desembolsado;

Considerando que hacia este sentido, más bien realista dentro del espíritu de la Ley y respetuoso con la voluntad social, se han pronunciado las Resoluciones citadas de 26 de febrero de 1953 y 24 de junio de 1968, y, más concretamente, la sentencia del Tribunal Supremo de 30 de abril de 1971, fallo cuya autoridad trata de desvirtuar el celo de la calificación con unos argumentos que, si en efecto acertarían en calificar el acto social cuestionado como de «destitución» de un solo Administrador y renovación y ampliación del Consejo, no resultan convincentes en puntos esenciales, cual es el que el artículo 15 de la Ley de Sociedades Anónimas sea permisivo de una situación de vacancia del Consejo de Administración, con amenazantes daños producidos por la agresión de minorías «inquietas y peligrosas», a que podría llegarse con «una generalización lógica y artificiosa» de la escritura objeto de la calificación registral, siendo así que, dentro de los límites legales, el acuerdo de la Junta contemplado vale por el peso democrático de unas mayorías de votos superiores a la fijada por la Ley, y frente al cual una minoría disidente o ausente, si lo estimara contrario a la Ley, opuesta a los Estatutos o lesiva a los intereses de la Sociedad en beneficio de uno o varios accionistas, tiene términos hábiles para impugnarlo con arreglo al artículo 87 de la repetida Ley de Sociedades Anónimas,

Esta Dirección General ha acordado revocar la nota del Registrador.

Lo que, con devolución del expediente original, comunico a V. S. para su conocimiento, el del recurrente y efectos. Dios guarde a V. S. muchos años.

Madrid, 13 de marzo de 1974.—El Director general, José Poveda Murcia.

Sr. Registrador Mercantil de Barcelona.

6837

**RESOLUCIÓN de la Dirección General de los Registros y del Notariado en el recurso gubernativo interpuesto por los fundadores de la Compañía mercantil «Talleres Pellicer, S. A.», contra calificación del Registrador Mercantil de Zaragoza.**

En el recurso gubernativo interpuesto por los fundadores de la Compañía mercantil «Talleres Pellicer, S. A.», contra calificación de V. S. a inscribir la escritura de constitución de la citada Empresa;

Resultando que por escritura autorizada en Zaragoza el 29 de diciembre de 1972 ante el Notario don David Mainar Pérez, se constituyó por la viuda e hijos de Pellicer la Compañía mercantil «Talleres Pellicer, S. A.», nombrándose Presidente a la viuda, doña Eulogia García Ara y Vicepresidente, Secretario y Vicesecretario a los restantes socios, sus hijos don Mariano, don José Antonio y don Santos Pellicer García, los dos primeros casados y soltero el último; que el artículo 7.º de los Estatutos Sociales dice que «podrá realizarse libremente la enajenación o venta de acciones, entre accionistas exclusivamente, por igual número entre todos ellos, y las que resten en exceso serán sorteadas entre los mismos. La mujer viuda de accionista seguirá disfrutando de la propiedad de sus acciones y del usufructo de viudedad de las que sean propiedad de los herederos del causante, pero no podrá enajenarlas ni transmitir las por herencia a otras personas, fuera de sus hijos o de los demás accionistas, y, en este último caso, a partes iguales, sorteando el exceso entre los mismos. La mujer viuda de accionista que contraiga nuevo matrimonio deberá transmitir todas sus acciones a sus hijos y, a falta de éstos o de su no aceptación, a los demás accionistas a partes iguales, sorteando entre los mismos las que excedan de la igual distribución. El precio será el expresado por el vendedor, y, a falta de conformidad con los adquirentes, será fijado por dos peritos designados, uno por el transmitente y otro por el presunto adquirente, y si entre estos peritos no hubiere tampoco acuerdo, se fijará el precio por un tercero designado por sorteo, entre dos peritos, nombrado uno por cada uno de los primeros peritos, sin que pueda transcurrir más de un mes entre las designaciones y el peritaje. En los casos de transmisión mortis causa de las acciones y cuando los herederos sean personas distintas de aquellas de libre transmisión inter-vivos o de los hijos del causante, deberán tales herederos presentar, dentro del plazo de seis meses después de ocurrir el óbito de su causante, los documentos que acrediten su condición de heredero y los títulos representativos de las acciones, ante el Consejo de administración, que lo notificará a los demás accionistas que puedan ejercer el derecho de preferente adquisición, en la forma, plazos y precios establecidos en las transmisiones inter-vivos. Si en las transmisiones inter-vivos o mortis causa ningún accionista hiciera uso del derecho de adquisición preferente, podrá la Sociedad, en el plazo de un mes, ejercer tal derecho, al sólo efecto de amortizar las acciones con la consiguiente reducción del capital. Si algún accionista no quisiera adquirir la parte proporcional de acciones que le pertenezca, las rechazadas serán adquiridas por los demás accionistas, a partes iguales y sorteando entre los mismos las que sobran de la distribución igualitaria. Toda transmisión efectuada sin observar los precedentes requisitos privará a las acciones de los derechos políticos y económicos atribuidos por las leyes y estos Estatutos»; que según el artículo 9.º, «ningún accionista podrá, sin previa autorización del Consejo, pignorar en todo o en parte, ofrecer en garantía o comprometer en otras Empresas las acciones suscritas, ni, en general, constituir derecho real sobre ellas»; que conforme al artículo 15, que trata de la asistencia y desarrollo de las Juntas sociales, «en cuanto al número de asistentes o representados a las Juntas y a la formación de mayorías de capital y accionistas para la validez de los acuerdos, se estará a lo dispuesto en la legislación vigente. La asistencia a las Juntas podrá hacerse directamente por los accionistas o por sus representantes en virtud de escrito, incluso privado, pudiendo conferirse la representación solamente a accionistas, salvo en los supuestos de representación legal»; y que con arreglo al artículo 16, «la Junta general será presidida por el Presidente del Consejo de Administración o accionista que lo represente, asistido del Secretario, quienes ostentarán, por tanto, el cargo de Presidente y Secretario de la Junta. Los acuerdos se transcribirán en el Libro de Actas, que serán firmados por el Presidente y Secretario obligatoriamente y deberán ser extendidos y aprobados a continuación de su celebración. Las reuniones tendrán lugar en el domicilio social salvo las de Juntas universales, o sea, las celebradas sin previa convocatoria por acuerdo unánime de todos sus accionistas o sus representantes».

Resultando que presentada en el Registro primera copia de la anterior escritura, fué calificada con nota del tenor literal siguiente: «Presentado el documento que antecede a las once horas del día de hoy, bajo el número 885, al folio 186 vuelto del tomo 18 del Diario de presentación, se deniega su inscripción por los siguientes defectos: Al El párrafo 2.º del artículo 7.º de los Estatutos, por qué ha de regirse la Compañía que se constituye, mas que el establecimiento y una limitación en la transmisión de las acciones, lo que estatuye es, por vía de una condición resolutoria, la exclusión del socio de la Compañía, condición que se entiende como contraria a la moral y a las buenas costumbres y por lo tanto implícita en el artículo 1.255